

Santiago, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés.

Vistos:

En estos autos Rol 729-2010, caratulados “Nicolás López Suárez” de la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, escrita a fojas 2.369 y siguientes, pronunciada por el Ministro en Visita Extraordinaria Sr. Leopoldo Llanos Sagristá, se condenó a Juan Francisco Saavedra Loyola, Daniel Luis Guimpert Corvalán, Manuel Agustín Muñoz Gamboa, César Luis Palma Ramírez, Raúl Horacio González Fernández, Juan Atilio Aravena Hurtuvia y Ernesto Arturo Lobos Gálvez, como autores de los delitos de asociación ilícita y del secuestro calificado de Nicolás Alberto López Suárez, perpetrados a partir del año 1975 —en el caso del delito de asociación ilícita— y, del 30 de julio de 1976 —en el caso del delito de secuestro calificado— a la pena única de quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo, a las accesorias legales y al pago de las costas de la causa. Asimismo, se condenó a Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, como autora del referido delito de asociación ilícita, y como cómplice del delito de secuestro calificado de Nicolás Alberto López Suárez, a la pena única de cinco años de presidio menor en su grado máximo, a las accesorias legales, y al pago de las costas de la causa.

En el aspecto civil, condenó al Fisco de Chile a pagar la suma de \$100.000.000 a cada uno de los actores civiles, con los reajustes e intereses dispuestos en dicho fallo.

Impugnada dicha decisión por la vía de sendos recursos de apelación, la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, que obra a fojas 2.812 y siguientes, la revocó en el acápite que condenó a los encausados en lo que respecta al delito de asociación ilícita



y, en su lugar, los absolvió. Respecto del delito de secuestro calificado, condenó a Juan Francisco Saavedra Loyola, Daniel Luis Guimpert Corvalán, Manuel Agustín Muñoz Gamboa, Raúl Horacio González Fernández, Juan Atilio Aravena Hurtuvia y Ernesto Arturo Lobos Gálvez a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, a las accesorias legales y al pago de las costas de la causa, en tanto que condenó a Viviana Lucinda Ugarte Sandoval a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, a las accesorias legales y al pago de las costas de la causa, como cómplice de dicho ilícito.

En el capítulo civil, se confirmó el referido fallo con declaración que las sumas ordenadas pagar se redujeron a \$70.000.000 por concepto de daño moral en favor de cada uno de los actores civiles.

Contra este último fallo, las defensas de los encartados Guimpert Corvalán, Aravena Hurtuvia, González Fernández, Ugarte Sandoval, Saavedra Loyola y Lobos Gálvez recurrieron por la vía de la casación sustancial, según se lee de sus presentaciones que obran a fojas 2.818, 2.832, 2.840, 2.857 y 2.863, respectivamente, todos los cuales fueron traídos en relación por dictamen de 21 de enero de 2020, según se lee a fojas 2.893.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de casación en el fondo deducido por la defensa de los sentenciados Guimpert Corvalán y Aravena Hurtuvia se cimenta en la causal de casación prevista en el artículo 546, N° 1 del código adjetivo, denunciando como infracción de ley una inobservancia al artículo 103 del código de castigo, en lo que guarda relación con la prescripción gradual de la pena.



Argumenta que, al no haberse dado aplicación a la denominada prescripción gradual se incurre en un error de derecho, toda vez que la media prescripción resulta independiente a la prescripción propiamente tal, como causal de extinción de responsabilidad penal. Explica que se trata de institutos diversos, y la prescripción gradual está circunscrita únicamente a aplicar una atenuante muy calificada para efectos de imponer una pena morigerada, justificada en normas de Derechos Humanos.

Lo anterior lleva a la infracción consecucional del artículo 68, inciso tercero del Código Penal, respecto a la graduación de la pena a imponer, por lo que solicita invalidar la sentencia y se dicte sentencia de reemplazo que les reconozca, junto con la circunstancia minorante de irreprochable conducta anterior —ya reconocida—, la prescripción gradual contenida en el artículo 103 del código punitivo y, aplicándose correctamente lo dispuesto en el artículo 68 del mismo cuerpo legal, se les condene a una pena no superior a la de presidio menor en su grado máximo.

Segundo: Que, el arbitrio de casación sustancial propuesto por la defensa de González Fernández se funda en el motivo previsto en el artículo 546, N° 7 del código de enjuiciamiento criminal, esto es, haberse vulnerado normas reguladoras de la prueba, en especial el artículo 488 del mismo cuerpo legal, en relación a los artículos 15 y 141 del Código Penal.

Explica que, de acuerdo a las probanzas allegadas al proceso, no se encontraría acreditada la participación o la responsabilidad penal de su defendido, por lo que debió resultar absuelto del cargo formulado. Afirma que, el único elemento que se tuvo en consideración, por parte de los sentenciadores del fondo para tener por acreditada su participación en los



hechos, fue una serie de declaraciones, sin embargo, ellas no resultan ser suficientes, ni permiten concluir su culpabilidad.

A pesar de lo anterior se construye una presunción judicial en su contra sin especificar cuál sería la participación atribuida en el secuestro de la víctima y, por lo tanto, la sentencia se ha dictado únicamente en torno a una errada presunción. Expone que los antecedentes existentes no cumplen los requisitos de los numerales 1º y 2º del artículo 488 del código adjetivo sino que, contrariamente, permitirían únicamente concluir su inocencia, por lo que pide invalidar la sentencia y dictar sentencia de reemplazo que lo absuelva del cargo formulado como autor del delito de secuestro calificado.

Tercero: Que, la casación en el fondo propuesta por la defensa de Ugarte Sandoval se asila en la causal contenida en el artículo 546, N° 7 del código adjetivo, al haberse infringido el artículo 488, numerales 1º y 2º parte primera del código adjetivo, en relación con los artículos 16 y 141 del Código Penal.

Expone que únicamente se ha determinado su participación en calidad de cómplice del delito de secuestro calificado, en base a la presunción judicial construida de acuerdo al artículo 488 del código adjetivo, teniendo como consideración únicamente que ella se desempeñaba en el centro de detención en la época en la cual la víctima se encontraba en el lugar, concluyendo los sentenciadores del fondo que ella habría actuado cooperando con actos anteriores o coetáneos a su detención. Afirma que, para elaborar la conclusión anterior el fallo se funda en una presunción que no resulta ser real, ya que no está probado y no se fundó de los antecedentes reales, otorgando el sentenciador en su conclusión su participación sin que exista prueba de inferencia sobre la materia. En su concepto no se ha acreditado el hecho base



que sirve de fundamento a la presunción, no pudiendo concluirse categóricamente que ella haya estado durante el mes de julio de 1976 en el cuartel denominado “La Firma”. La circunstancia en cuanto a que ella hubiese estado durante el mes de julio en ese lugar, al momento de ser detenida la víctima, no puede servir de fundamento a la presunción en cuanto a que ella hubiese cooperado en su detención, tampoco lo permite la declaración de un testigo que afirma que trabajaba como secretaria en ese lugar. Todos los elementos probatorios presuntos no cumplen con el requisito de ser un hecho real y probado. Ella, al momento de los hechos era una estudiante de 18 o 19 años de edad que concurre a buscar trabajo como secretaria en el mes de octubre de 1976, pero recién en 1977 fue contratada como Cabo Segundo, en el cargo de escribiente administrativo, razón por la cual no se ha acreditado su participación, por lo que solicita invalidar la sentencia y se dicte sentencia de reemplazo que la absuelva del cargo formulado como cómplice del delito de secuestro calificado.

Cuarto: Que, el recurso de casación sustancial propuesto por la defensa de Saavedra Loyola se funda en la causal establecida en el artículo 546, N° 1 del código adjetivo, denunciando como infringidos los artículos 68 y 103 del Código Penal, en relación a los artículos 15 y 141 del mismo cuerpo legal, toda vez que no se aplicó en su favor la prescripción gradual, infringiéndose el principio de legalidad y el principio *pro reo*. Asimismo, tomando en consideración que el artículo 103 del código de castigo, en relación a la prescripción gradual, explica que tal instituto responde a un principio de humanidad en materia penal en evidente razones de justicia, razón por la cual solicita invalidar la sentencia y se dicte sentencia de reemplazo que lo condene



a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, y se le sustituya la pena por la de libertad vigilada.

Quinto: Que, el arbitrio recursivo propuesto por la defensa de Lobos Gálvez se construye respecto de dos causales de casación sustancial. La primera, contenida en el artículo 546, N° 1 del código adjetivo, por cuanto de los antecedentes no se desprenden elementos que permitan determinar de manera categórica y fehaciente cualquier grado de participación culpable en los hechos. También respecto a las circunstancias minorantes de responsabilidad penal, por cuando no se acogió la prescripción gradual de la pena.

La segunda, establecida en el artículo 546, N° 7 del código adjetivo por cuanto el fallo condenatorio se funda en meras presunciones que no pueden ser tenidas como verdaderas, refiriendo que los requisitos del artículo 488 del código adjetivo resultan copulativos y asimismo, el artículo 456 bis del código adjetivo refiere que nadie puede ser condenado sino cuando se adquiere la convicción que realmente se ha cometido un hecho punible, por lo que solicita invalidar la sentencia y se dicte sentencia reemplazo que lo absuelva del cargo formulado en su contra como autor del delito de secuestro calificado.

Sexto: Que, como se consigna en el motivo segundo de la sentencia del de primer grado —no alterada en alzada—, ésta tuvo por demostrados los siguientes hechos:

“a) Que durante los años 1975 y 1976 funcionó un organismo represivo —denominado “Comunidad de Inteligencia” y conocido posteriormente como “Comando Conjunto”— conformado por miembros de distintas ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y también por algunos civiles ex miembros del grupo antimarxista denominado “Patria y Libertad”. Dicho organismo represivo fue constituido por decisión de las Direcciones de Inteligencia de las



Fuerzas Armadas y Carabineros, cuyo cuartel general se instaló en un edificio ubicado en calle Juan Antonio Ríos N° 6 de Santiago Centro (JAR 6), donde se encontraban las Direcciones de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA), del Ejército (DINE), de la Armada (SIN) y de Carabineros (SICAR).

b) Operativamente, el aludido organismo represivo funcionó en centros clandestinos de detención y tortura, denominados “Nido 20” (ubicado en el sector del Paradero 20 de la Gran Avenida) y “Nido 18” (localizado en el sector del Paradero 18 de Vicuña Mackenna); y posteriormente, desde octubre o noviembre de 1975, en “Remo 0”, ubicado al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina de la Fuerza Aérea de Chile (en adelante, FACH). Finalmente, los agentes operativos se trasladaron desde este último lugar — con exclusión de los miembros del Ejército, que en esa época se marginaron del organismo—, a comienzos de 1976, hasta el cuartel “La Firma”, ubicado en calle 18 de Septiembre de Santiago Centro, a la altura del 200, en el edificio en del ex diario “El Clarín”.

c) En todos los recintos clandestinos de detención antes señalados se efectuaron torturas a los detenidos, algunos de los cuales fallecieron como consecuencias de las mismas; o se les ejecutó por los agentes, haciendo desaparecer sus cuerpos.

d) El cuartel “La Firma” funcionó hasta diciembre de 1976, y corresponde a un edificio antiguo con varias dependencias, algunas de las cuales eran oficinas, otras salas de interrogatorio, y otras, calabozos. Algunas de dichas dependencias tenían piso de baldosas blanco y negro. Además, los agentes operativos que allí se encontraban utilizaban, para salir a detener personas, varios vehículos, entre ellos un automóvil Chevy Nova de color amarillo.



e) Eran jefes de dicho cuartel el teniente de la Armada Daniel Luis Guimpert Corvalán, quien a su vez dependía del Comandante Sergio Barra Von Kretschman, director del SIN; el teniente de la FACH Roberto Fuentes Morrison, quien dependía del Comandante de la FACH Juan Saavedra Loyola, y éste a su vez, del director de la DIFA, Freddy Enrique Ruiz Bunge; y el Teniente de Carabineros Manuel Agustín Muñoz Gamboa, quien a su vez era subordinado del Capitán de dicho cuerpo Germán Esquivel Caballero, siendo jefe del área de inteligencia de Carabineros el Coronel Rubén Romero Gormaz.

f) Tanto Guimpert Corvalán, como Fuentes Morrison y Muñoz Gamboa dirigían sendos grupos de subalternos que cumplían labores operativas, deteniendo personas para trasladarlas al recinto ya señalado, donde eran interrogados bajo torturas, como más arriba se señaló.

g) Desde fines de 1975, y durante todo el año 1976, la actividad represiva del organismo antes referido se dirigió especialmente en contra de la estructura clandestina de las Juventudes Comunistas, (en adelante, JJ.CC.); pero también en contra de algunos de los militantes clandestinos del Partido Comunista (P.C.). Para lo anterior utilizó la información proporcionada por militantes de las JJ.CC. que, luego de ser detenidos, se transformaron en colaboradores y en algunos casos agentes, como Carol Flores Castillo, Miguel Estay Reyno y René Basoa Alarcón. Fue así como comenzaron a ser detenidos numerosos dirigentes de la aludida organización política, los que desempeñaban o habían asumido tareas de dirección de la misma en reemplazo de quienes eran detenidos, o que se encontraban “congelados” (ocultos en casas de seguridad) como medida de prevención ante la ola represiva desencadenada en contra de la organización.



h) Que desde el segundo semestre de 1976, tanto las JJ.CC. como el P.C. contaban con una dirección interna (dentro del país), existiendo distintas comisiones que desarrollaban su función en frentes específicos, como el frente sindical. Uno de los integrantes de dicha comisión sindical era Nicolás López Suárez, siendo su contacto con el Partido Juan Gianelly Company, el que había sido detenido —y se encontraba desaparecido— desde el 26 de julio de 1976. Como medida de seguridad, y a raíz de la detención de militantes del Partido y de las Juventudes Comunistas en esa época, López Suárez se trasladó a vivir desde su domicilio en la comuna de Providencia —donde vivía con su cónyuge Juana Muñoz Tapia— a calle República N° 72, Santiago Centro, domicilio de su sobrino Juan Montalván López, quien a su vez trabajaba como garzón en el Restaurante “Establecimientos Carrera”, ubicado en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 2167, y quien colaboraba con el trabajo clandestino del Partido Comunista, utilizándose el aludido establecimiento como “buzón”.

i) El día 30 de julio de 1976, en el antes nombrado restaurante, Nicolás López se juntó a almorzar con Anita Altamirano Aravena, mujer de Juan Gianelly Company, alrededor de las 12:30 horas, confidenciando a su sobrino Montalván López que lo venían siguiendo y que quería hablar con él una vez que saliera. Asimismo, llegaron al local dos individuos que se sentaron cerca de Nicolás López y Anita Altamirano. Uno era alto, rubio y macizo de alrededor de cuarenta años, y el otro bajo y moreno, con el pelo ondulado y de unos treinta y cinco años, quienes antes ya habían estado en el restaurant y que comenzaron a vigilar a Nicolás López y a su acompañante. Mientras su sobrino se fue a cambiar ropa para, una vez terminado su turno, juntarse a conversar con Nicolás López, cuando salió del local aproximadamente a las 14:00 horas,



aquel y su acompañante ya no se encontraban en el lugar así como tampoco los individuos que lo vigilaban. Según Anita Altamirano y algunos testigos, al salir la pareja del restaurant, López dejó a la mujer en un taxi, en la misma esquina del local. Su sobrino reconoció posteriormente en las fotografías que se le exhibieron a Roberto Fuentes Morrison, alias “Wally, como una de las personas que seguía a Nicolás López y que el día de su desaparición lo vigilaba dentro del restaurant. Igualmente, Anita Alvarado señaló que una de las personas que vio en el restaurant en el día de los hechos era Fuentes Morrison, a quien conocía con anterioridad.

j) Desde el momento de la desaparición de Nicolás López, éste no se ha contactado con sus familiares, no registra salidas del país ni tampoco consta su defunción”.

Estos hechos fueron calificados, en primera instancia, como constitutivos de los delitos de asociación ilícita, descrita y sancionada en los artículos 292, 293 y 294 del Código Penal; y, secuestro calificado, previsto y sancionado en el artículo 141 del Código Penal.

En el fallo de segundo grado se mantuvo la calificación respecto del delito de secuestro calificado, en perjuicio de la víctima Nicolás Alberto López Suarez, sin embargo se suprimió la calificación jurídica respecto del delito de asociación ilícita, conforme lo expresado en el fundamento quinto del dictamen *ad quem*, decisión no fue objeto de reparo por las partes.

Séptimo: Que, en lo que respecta a los reproches contenidos en los recursos de casación deducidos por las defensa de Guimpert Corvalán, Aravena Hurtuvia, Saavedra Loyola, y la primera parte del arbitrio propuesto por la defensa de Lobos Gálvez respecto a la denominada prescripción gradual, la sentencia declara que no puede prescindirse de la normativa del



derecho internacional de derechos humanos, que excluye la aplicación de la prescripción tratándose de delitos de lesa humanidad.

Luego, el carácter de imprescriptibles de los delitos de lesa humanidad es común a la prescripción total y a la prescripción gradual, del momento que ambos institutos comparten la misma naturaleza jurídica; y no resulta lógico ni racional que lo que es aplicable al primero de ellos, no lo sea para el segundo en circunstancias que su fundamento es el mismo. Tratándose en la especie de delitos de lesa humanidad, tienen el carácter de imprescriptibles, cuyo fundamento y naturaleza es también extensivo a la media prescripción.

Octavo: Que, sin perjuicio de lo señalado por el fallo impugnado, la jurisprudencia constante de esta Sala Penal ha utilizado dos argumentos para desestimar esta causal del recurso, en tanto se afina en el artículo 103 del Código Penal.

Por una parte, la calificación de delito de lesa humanidad dada al hecho ilícito cometido, obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuentemente, contrarios a las regulaciones de *ius cogens* provenientes de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo.

Pero junto con ello, se subraya que cualquiera sea la interpretación que pueda hacerse del fundamento del precepto legal en discusión, es lo cierto que las normas a las que se remite el artículo 103, otorgan una mera facultad al juez y no le imponen la obligación de disminuir la cuantía de la pena, aunque



concurran varias atenuantes (entre otras, SCS N°s 35.788-2017, de 20 de marzo de 2018; y, 39.732-2017, de 14 de mayo de 2018). En tales condiciones, los recursos en estudio, en este acápite, no podrán prosperar.

En lo que respecta a la alegación contenida en la causal en estudio, respecto del encausado Lobos Gálvez, en torno a la supuesta insuficiencia de elementos de cargo para establecer su participación en los hechos, huelga recordar que tal argumentación resulta improcedente en la causal en estudio, pues la misma solo incumbe sobre errores en cuánto a la determinación de la pena a imponer.

Noveno: Que, en lo que respecta a los arbitrios deducidos por la defensa de Ugarte Sandoval y segundo acápite del recurso de Lobos Gálvez, de acuerdo al artículo 485 del Código de Procedimiento Penal, *“presunción en juicio criminal es la consecuencia que de hechos conocidos o manifestados en el proceso, deduce el tribunal ya en cuanto a la perpetración de un delito, ya en cuanto a las circunstancias de él, ya en cuanto a su imputabilidad a determinada persona”*.

Que, según constante jurisprudencia, los numerales 1° y 2° del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal constituyen leyes reguladoras de la prueba, en cuanto requieren que las presunciones se funden en hechos reales y probados y ser múltiples, desde que en estos numerales se establecen dos exigencias que significan limitaciones en la facultad de estimación del juez, en el sentido que las presunciones no pueden fundarse en otras presunciones, sean legales o judiciales, y de que una sola presunción es ineficaz para constituir la prueba completa de un hecho (Repertorio del Código de Procedimiento Penal, T. II, pp. 273 y 274, cuarenta sentencias citadas).



Décimo: Que, la presunción judicial, como toda presunción, constituye el ejemplo más relevante de la prueba indirecta, la cual reside en la inferencia que induce del hecho conocido el hecho sometido a prueba, o sea, que el resultado se obtiene por razonamiento en lugar de ser comprobado o declarado verbalmente por escrito, como en otras pruebas. (Latorre, Graciela. "Las presunciones en el proceso penal", Memoria de Prueba para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, Editorial Universitaria, 1964, p. 145).

Las presunciones judiciales, como sus semejantes legales, parten de lo conocido a lo desconocido, pero esta circunstancia especialmente importante en materia penal es que el juez a diferencia del magistrado civil que dispone de una versión de los hechos establecidos por las partes, actúa ante lo desconocido y a él le incumbe la búsqueda del autor del hecho o la determinación de la forma en que habría actuado en su perpetración (op. cit.).

La prueba de presunciones, basada sobre la inferencia o el razonamiento, tiene, como punto de partida, por tanto, los hechos o circunstancias que se suponen probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, que constituye la X del problema, ya sea una incógnita por determinar, ya un dato por completar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado (Gorphe, François. "De la apreciación de las pruebas", Edic. Europa-América, Buenos Aires, 1995, p. 250).

La doctrina suele diferenciar entre indicios y presunciones, conceptos que nuestra ley procesal identifica, según se desprende del mismo Mensaje del Código, unido al texto de los artículos 110 y 457. En realidad, precisó el



entonces Ministro de esta Corte Suprema don Marcos Libedinsky Tschorne, en su prevención contenida en la sentencia de 30 de mayo de 1995, en Rol 30.174-1994, debe concluirse que el indicio y la presunción son conceptos diferentes pero que se relacionan, por cuanto el indicio (la voz latina *indicium* deriva de *indicare*, que significa indicar, hacer conocer algo) es un hecho conocido del cual se infiere la existencia de otro hecho desconocido, mediante un razonamiento del juez que es lo que constituye la presunción. Este es el alcance del artículo 485 del Código de Procedimiento Penal en cuanto señala que la presunción en el juicio criminal es la consecuencia que, de hechos conocidos o manifestados en el proceso (indicio o hecho indiciario), deduce el tribunal (razonamiento, operación mental de inferencia lógica) ya en cuanto a la perpetración del delito, ya en cuanto a las circunstancias de él, ya en cuanto a su imputabilidad a determinada persona (RDJ, T. XCII, 1995, 2ª parte, secc. 4ª, pp. 70 y ss.).

Que, la estimación del indicio como hecho base y la presunción como inferencia constituye la tesis más generalizada. Muñoz Sabaté afirma que el indicio no es ningún razonamiento discursivo, no representa ninguna categoría especial de inferencia como lo es en cambio la presunción, sino que equivale a la afirmación base de la cual parte precisamente aquélla. (Muñoz Sabaté, Luis, “Técnica probatoria. Estudio sobre las dificultades de la prueba en el proceso”, Edit. Praxis, Barcelona, 1983).

Undécimo: Que, al tenor de lo requerido por el N° 1, del artículo 488 del código del ramo, los hechos base deben ser, antes que nada, reales y probados por otros medios distintos de las presunciones. *“Los hechos generadores deben hallarse probados en la causa y esta prueba debe constar por los otros medios, vale decir, no por otras inferencias”* (Silva, Mauricio. “Las



presunciones judiciales y legales. Construcción lógica de las pruebas indirectas”, Editorial Jurídica ConoSur, 1989, p. 58).

Duodécimo: Que, atendido el tenor de los recursos de casación, cimentados en una contravención del artículo 488 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en sus numerales 1° y 2°, que llevó a la condena de los encartados individualizados *ut supra*, corresponde a esta Corte dilucidar si en la especie los sentenciadores, al dictar el fallo atacado, infringieron efectivamente la ley reguladora tantas veces citada, con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo.

Decimotercero: Que, a juicio de esta Corte, los hechos o indicios útiles o idóneos para ser considerados a la luz del precepto legal decisivo en esta materia —artículo 488, numerales 1° y 2° del código adjetivo (en cuanto exige multiplicidad)—, son los siguientes respecto los sentenciados, a la época de los hechos investigados:

i) Viviana Lucinda Ugarte Sandoval:

a) Su propia declaración de fojas 1.115, en cuanto refiere haber pertenecido a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA), y que el año 1976 se desempeñó en el Comando Conjunto en el cuartel “La Firma”, lugar en que vio a personas detenidas que colaboraban con el aludido Comando; y, que cumplió labores de vigilancia junto a otros agentes en plazas y domicilios;

b) Parte Policial N° 542, de fecha 29 de mayo de 2009, emanado de la Brigada Investigadora de Delitos en contra de los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, de fojas 313 y siguientes. Indica la fecha de inicio del Comando Conjunto; composición del mismo; cuarteles y lugares de detención. Señala que en marzo de 1976 el Comando aludido se trasladó a



un inmueble al que se denominó “La Firma”. Indica los nombres de los integrantes de cada grupo operativo, entre los que se señala a Viviana Ugarte Sandoval;

c) Declaración de Pedro Juan Zambrano Uribe de fojas 1.185 y siguientes, 3523 y siguientes, miembro de la DIFA, quien señala que en “La Firma”, ubicada en calle Dieciocho de Septiembre, el oficial a cargo era Juan Saavedra Loyola”, alias “El Mono Saavedra”, quien concurría de uniforme y mantenía allí a su secretaria Viviana Ugarte, alias “La Pochi”;

d) Testimonio de Andrés Antonio Valenzuela Morales de fojas 769 y 812, miembro de la Fuerza Aérea de Chile y ex agente del Comando Conjunto, quien señala que a mediados del mes de marzo de 1976 se trasladaron desde Colina hasta el local del ex Diario “El Clarín”, ubicado en calle Dieciocho N° 229, y más conocido como “La Firma”, al que se incorpora, entre otros agentes, Viviana Ugarte Sandoval, alias “La Pochi”, realizándose operativos que terminaban con la detención de los integrantes de las Juventudes Comunistas y del Partido Comunista;

e) Dichos de María Ester Moreno García de fojas 1.041. Expresa que en cuanto a “La Firma”, donde estuvo detenida, vio a agentes del Comando Conjunto, entre los que se encuentra: “El Papudo”, “Lolo Muñoz”, “La Pochi”. Recuerda perfectamente que la “Pochi” participaba en las torturas y era más “perra” que los hombres; iba a hostigar sexualmente a Mallea, lo que escuchaba porque la declarante estaba en la celda de al lado. Esto pasó varias veces;

f) Testimonio del encausado Miguel Estay Reyno, quien a fojas 969 señaló los funcionarios que prestaron servicios en el Comando Conjunto. Indica



que al círculo de oficiales al cual tenía acceso “Larry”, y que en ocasiones acompañaba la “Pochi”.

ii) Ernesto Arturo Lobos Gálvez.

a) Sus propios dichos, de fojas 1.056, en cuanto refiere que fue integrante del Comando Conjunto, desempeñándose durante el año 1976 en el cuartel “La Firma”, y que en una oportunidad acompañó a Roberto Fuentes Morrison (“El Wally”) y a otros agentes al Cajón del Maipo, donde fueron en varios vehículos, llevando detenidos que posteriormente no regresaron a dichos vehículos;

b) Parte Policial N° 542, de fecha 29 de mayo de 2009, emanado de la Brigada Investigadora de Delitos en contra de los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, de fojas 313 y siguientes. Indica la fecha de inicio del Comando Conjunto; composición del mismo; cuarteles y lugares de detención. Señala que en marzo de 1976 el Comando aludido se trasladó a un inmueble al que se denominó “La Firma”. Indica los nombres de los integrantes de cada grupo operativo, entre los que se señala el de Ernesto Lobos Gálvez.

c) Imputación del coencausado Miguel Estay Reyno, quien a fojas 969 señala que, entre los funcionarios que prestaron servicios en el Comando Conjunto, en el cuartel “La Firma”, a Ernesto Lobos Gálvez, apodado “Tito”, interrogador junto a Pascua Riquelme;

d) Declaración de coencartado Palma Ramírez a fojas 1.331, quien sostiene que en el cuartel “La Firma”, todas las actividades eran clandestinas y secretas. Menciona al suboficial de Carabineros Carlos Pascua Riquelme, apodado “Larry”, quien fue miembro de la plana Mayor, y su ayudante Ernesto Lobos Gálvez, sindicándolos como “encargados de interrogar a los detenidos,



confeccionar las fichas, planificar los operativos y hacerse cargo de todos los detenidos a su ingreso al cuartel”;

e) Versión de Juan Arturo Chávez Sandoval de fojas 1.145 y siguientes. Ex agente de la DIFA, en algunas ocasiones fue enviado a cumplir funciones a de resguardo de recinto al “Cuartel La Firma”, que era un cuartel a cargo de Carabineros de Chile, el jefe de recinto era un oficial de apellidos Muñoz Gamboa, alias “Lolo”, quien recuerda realizaba labores operativas, también a los funcionarios apodados “Jano” y “Tito”.

iii) Raúl Horacio González Fernández.

a) Sus propios dichos, en cuanto refiere haber pertenecido a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA), y que el año 1976 conoció a los integrantes del Comando Conjunto Roberto Fuentes Morrison, César Palma Ramírez, Jorge Cobos Manríquez y al comandante “Mono Saavedra” —Juan Saavedra Loyola—;

b) Parte Policial N° 542, de 29 de mayo de 2009, emanado de la Brigada Investigadora de Delitos en contra de los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, de fojas 313 y siguientes, el cual indica la fecha de inicio de operaciones del Comando Conjunto; su composición; sus cuarteles y lugares de detención, estableciendo que, en el mes de marzo de 1976 —el Comando aludido— se trasladó hasta un inmueble al cual se le denominó “La Firma”. Asimismo, individualiza los nombres de los integrantes de cada grupo operativo, entre los cuales se sindicó a Raúl Horacio González Fernández;

c) Declaración de Alex Damián Carrasco Olivos, que rola a fojas 1.172 y siguientes, ex miembro de la DIFA, quien expresó que la primera semana de noviembre de 1976 fue designado y comisionado en reemplazo de un cabo segundo de nombre Raúl González Fernández, al cual le decían de apodo



“Wally chico”, y que debía realizar un curso durante dicha semana, quien trabajaba en un recinto ubicado en calle Dieciocho de Septiembre, a dos cuadras de la Alameda hacia el sur, a la altura del número doscientos y que, posteriormente, fue informado que se le denominó cuartel “La Firma”;

d) Declaración de Juan Arturo Chávez Sandoval, que obra a fojas 1.145 y siguientes, ex miembro de la DIFA, quien señaló que fue enviado a cumplir funciones al cuartel “La Firma”, afirmando que Fuentes Morrison —alias Wally— contaba con la colaboración de un grupo de civiles, entre los que recuerda a César Palma. También había otros funcionarios de la Fuerza Aérea, que a veces iban a “La Firma” como un sujeto de apellido González, apodado “Wally chico”, dado que siempre lo acompañaba;

e) Dichos del coenjuiciado Miguel Estay Reino, que obra a fojas 969, quien señala a los funcionarios que prestaron servicios en el Comando Conjunto, indicando entre ellos a Raúl Horacio González Fernández, alias “Wally chico”, a quien señala como de la confianza de Roberto Fuentes Morrison, y que participó en la búsqueda de los restos de Carlos Contreras Maluje para entregarlos a la Escuela de Formación Policial en Cerrillos, seguramente para arrojarlos al mar;

f) Declaración policial de Pedro Matta Lemoine que rola a fojas 869 y siguientes, quien sostiene que fue detenido el 17 de mayo de 1975 por efectivos de la agrupación Águila, siendo trasladado a distintos centros de detención. Afirma que el Comando Conjunto desarrolló una intensa actividad con el objeto de desarticular a los organismos sindicales relacionados con las Juventudes Comunistas. Respecto de los agentes que trabajaron en “La Firma”, menciona a Manuel Agustín Manuel Gamboa, Daniel Guimpert



Corvalán, Raúl González Fernández, Cesar Palma Ramírez, Viviana Ugarte Sandoval, Miguel Estay Reyno, entre otros;

g) Testimonio de Pedro Ernesto Caamaño Medina, que obra a fojas 1.496 y siguientes, ex agente de la DIFA, quien expresó que se trasladaban a distintos lugares, siendo destinado en numerosas oportunidades a “La Firma”, agregando que nunca le correspondió participar en operativos junto al Wally — Fuentes Morrison—, ya que él tenía su equipo para ello, el que estaba integrado por Cesar Palma Ramírez, alias “Fifo”; y, Raúl González Fernández, a quien apodaban “Wally chico”;

h) Declaración de Andrés Valenzuela Morales, ex agente de la DIFA y del Comando Conjunto, quien a fojas 769 y siguientes señala que Raúl González Fernández era un funcionario de la Fuerza Aérea que prestó servicios en “La Firma” como guardaespaldas, le decían “Wally chico”.

Decimocuarto: Que los hechos reseñados precedentemente, desprendidos de las piezas procesales que en cada caso se ha indicado, son reales, desde que ocurrieron en determinado lugar y tiempo y están probados, esto es, acreditados legalmente en los autos a través de los medios probatorios detallados en el motivo precedente. Son hechos reales y probados, ha explicado esta Corte Suprema, *“los indicios de cualquier género, el dicho de un testigo hábil o de varios inhábiles, la opinión de un perito singular, la declaración extrajudicial y otras semejantes, siempre que ellas formen parte del mérito de autos”* (SCS, 14.12.1967, R., t. 65. Secc. 4ª, p. 71). En cuanto a que son múltiples esos hechos, tal requisito está al margen del cuestionamiento dado su pluralidad respecto de cada uno de los encartados que se desempeñaron en torno al Comando Conjunto y al cuartel denominado “La Firma”, a la época de los hechos.



Decimoquinto: Que de los hechos o indicios señalados, precisos y concordantes, pueden inferirse, mediante el ejercicio lógico valorativo a que es llamado el tribunal, presunciones judiciales de la participación de los encartados en los delitos legalmente establecidos.

Decimosexto: Que, estando satisfechos los requisitos de los numerales 1º y 2º del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal —únicos revisables en esta sede— cabe concluir que los sentenciadores, al establecer los hechos en torno a la participación de los acusados a título de cómplice y autor, no han vulnerado a su respecto la norma en análisis.

Decimoséptimo: Que, en cuanto se refiere a los demás requisitos fijados por el artículo 488 ya citado, importan preceptos que por sus características caen plenamente dentro de las facultades propias de los jueces del fondo, a cuyo criterio exclusivo ha de quedar sujeto apreciar tanto la gravedad como la precisión, concordancia y conducción lógica y natural de las presunciones a la comprobación del hecho que de ellas se pretende deducir (Repertorio del Código de Procedimiento Penal, T. II, pp. 273-274, 23 fallos).

“Para determinar las condiciones de gravedad, precisión y concordancia que deben reunir las presunciones, no existe una disposición especial que normalice su aceptación o repudio, por lo cual la apreciación de estas condiciones queda entregada al criterio de los jueces del fondo, sin que para estimarlas o valorarlas deban ceñirse a reglas especiales que regulen su valoración” (Repertorio cit., pp. 274-275, 24 sentencias).

Decimoctavo: Que, a criterio de estos sentenciadores, las presunciones extraídas de los hechos o indicios reseñados en el motivo decimotercero, cumplen las exigencias que estos medios de prueba han de satisfacer, más



allá de las previstas en los N°s 1 y 2 (multiplicidad) del artículo 488 del Código del ramo, que se han dado por establecidas.

En efecto, tienen el carácter de graves, ya que son de mucha entidad o importancia, dada su fuerza como elementos conducentes al raciocinio del juzgador. Son, además, precisas, esto es, no ambiguas, ya que los indicios que las sustentan conducen todos a una misma conclusión. Tienen también el carácter de directas, porque concordadas conducen lógica y naturalmente al hecho que de ellas se deduzca.

Por último, las unas concuerdan con las otras, desde que los hechos o indicios fundantes guardan conexión, enlace o trabazón entre sí e inducen todas, sin contraposición alguna, a la misma conclusión a que se arriba, de forma tal que los yerros denunciados no logran configurarse, no pudiendo prosperar los recursos por la causal anotada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se decide que **se rechazan** los recursos de casación en el fondo interpuestos por las defensas de los sentenciados Daniel Luis Gimpert Corvalán, Raúl Horacio González Fernández, Ernesto Arturo Lobos Gálvez, Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, Juan Francisco Saavedra Loyola y Juan Atilio Aravena Hurtuvia, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve y que obra a fojas 2.812 y siguientes, la cual **no es nula**.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Brito.

N° 889-2020.



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., la Ministra Sra. María Teresa Letelier R., y el Abogado Integrante Sr. Diego Munita L. No firman el Ministro Sr. Brito y la Ministra Sra. Letelier, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ambos con permiso.



En Santiago, a veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

